

EL TIEMPO ASCENSO DE TEMPERATURAS

Aumento progresivo de las temperaturas durante los primeros días de la semana. Se registrarán valores en el

entorno de los 30 grados. Algún intervalo nuboso. A partir del viernes las temperaturas algo más bajas.



Europa pone «en la cuerda floja» el modelo de explotación familiar

Las Opas alertan de que el sector primario de Castilla y León está configurado de forma mayoritaria por granjas de tamaño pequeño y mediano y «se la juega» estos días en la negociación de la PAC

El sector primario de Castilla y León con su modelo más extendido, el de la pequeña y mediana explotación familiar, «se la juega» estos días en la Unión Europea, con la negociación de la futura Política Agrícola Común (PAC) para el periodo 2022-2027. Por eso las Organizaciones Profesionales Agrarias (Opas) señalan que este tipo de explotaciones están «en la cuerda floja» y piden cautela tras el fracaso de las negociaciones de la última semana de mayo, a instan a la UE a lograr un gran acuerdo para proteger a la agricultura y ganadería familiar.

Así, según la Unión de Pequeños Agricultores (Upa), los agricultores y ganaderos españoles «deberán seguir esperando unas semanas más para conocer la letra pequeña de la política que marca su trabajo y su vida», ya que «el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europea, las tres instituciones que dirigen la Unión, no han sido capaces de cerrar un acuerdo que concrete la futura Política Agrícola Común».

UPA lamenta que las negociaciones no hayan llegado «a buen puerto», pero asegura que «aún no es tarde para lograr un gran acuerdo que proteja especialmente al modelo mayoritario de la agricultura y la ganadería en España: el formado por explotaciones familiares de pequeña y mediana dimensión».

«La PAC va mucho más allá de ser una política para los agricultores y ganaderos, es una política que garantiza alimentos sanos, saludables y a precios asequibles a toda la población. Es por tanto una de las políticas más importantes de Europa», explican desde la organización agraria. Para Upa, el techo máximo de ayudas es una de las claves para el futuro de la PAC. «¿Qué sentido tiene que haya grandes terratenientes percibiendo sumas enormes de dinero cuando los pequeños agricultores y ganaderos se ven abocados al cierre?», reflexionan en la Opa. El techo máximo de ayudas es una reivindicación histórica y una conquista social «irrenunciable», que el propio Parlamento Europeo respalda.

Por eso la organización ha pedido al ministro de Agricultura, Luis Planas, que no dé ni un paso atrás en la

exigencia de una ayuda redistributiva de, al menos, el 12%. Esta ayuda debe servir para lograr la ansiada 'justicia social' en las ayudas al campo que vienen de Europa. «Ese apoyo debe ser uno de los puntales del futuro del medio rural español y europeo. Protegiendo a los más pequeños estaremos luchando por el reto demográfico y contra la despoblación, y fomentando los modelos de agricultura y ganadería más sostenibles», asegura Upa.

Sobre la llamada condicionalidad social de las ayudas, la organización cree que los derechos laborales deben cumplirse todos «sí o sí». Vincular la percepción de una ayuda al cumplimiento de derechos es una «incongruencia», recalca. Tanto la Comisión, como el Parlamento y el Consejo «deben ser muy conscientes de los avances que la agricultura y la ganadería han hecho en estos años en competitividad, sostenibilidad y modernización. No podemos permitirnos que ningún agricultor o ganadero se vea obligado a abandonar por no cumplir nuevas exigencias de carácter medioambiental».

Y es que los agricultores europeos «realizan un uso sostenible de los

productos fitosanitarios», añade la organización. Es una de las conclusiones de un reciente informe elaborado por el Comité Económico y Social Europeo (Cese) y coordinado por la Upa. La organización agraria ha realizado una evaluación de la Directiva europea 2009/128/EC, concluyendo que la utilización de estos productos para luchar contra las enfermedades de las plantas y garantizar la producción de alimentos es «razonable y sostenible».

El director de Relaciones Internacionales de Upa y consejero del Cese, José Manuel Roche, fue el ponente de este documento informativo, presentado el pasado jueves, que analiza en detalle la aplicación de esta directiva en hasta cinco países de la UE: España, Irlanda, Suecia, Bulgaria y Croacia. «La directiva ha contribuido a que el uso de los fitosanitarios en Europa sea cada vez más lógico y adecuado», señala Roche.

FITOSANITARIOS

El estudio concluye que la manipulación y el tratamiento con fitosanitarios en el campo ha vivido avances significativos desde 2009. Sin embargo, «sigue habiendo cierta falta de conocimiento sobre las normativas que rigen su aplicación en los usuarios finales». El informe también concluye que hay que reforzar los sistemas de monitorización para analizar el cumplimiento de los objetivos de reducción de fitosanitarios.

El documento asegura que los agricultores se enfrentan a las pre-

siones de producir más alimentos haciendo un uso cada vez menor de herramientas como los fitosanitarios, cuando las alternativas para hacer frente a problemas como las plagas son «escasas y caras». Y es que el 81% de los agricultores encuestados por el Cese aseguran que sufren presiones económicas para usar los fitosanitarios e incrementar su rentabilidad.

Al mismo tiempo, los productores ven cómo se incrementan las importaciones a Europa de productos de terceros países «que no se caracterizan precisamente por hacer un uso sostenible de los fitosanitarios». El principio de reciprocidad en los acuerdos con otros países «no se está cumpliendo», asegura Roche. El Cese también insta a las instituciones europeas a crear un marco normativo armonizado. La PAC, la Directiva de uso sostenible de fitosanitarios, el Pacto verde y la estrategia *De la granja a la mesa* «son normativas que afectan a los agricultores de forma directa y pueden hacerlo negativamente de no aplicarse con lógica».

«Todos queremos una Europa más limpia y sostenible, y los agricultores somos expertos en producir más con menos, pero es fundamental que se reconozca la dificultad de nuestro trabajo y la necesidad de garantizar unos precios justos para nuestros productos», declara Roche. «Producir alimentos es complejo, y el cambio climático lo complica aún más, por eso la sociedad debe saber que los fitosanitarios se usan con control y con segu-

ridad. Aquí más que en ningún lugar del mundo», concluye.

Las negociaciones de la Política Agrícola Común se han pospuesto hasta finales de este mes de junio, cuando habrá una nueva oportunidad para lograr «un acuerdo sólido que sienta las bases de una PAC que apoye a los que más lo merecen y lo necesitan, a los que vivimos y trabajamos en los pueblos y alimentamos a toda la sociedad», concluye Upa.

Por su parte, Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) lamenta también la falta de acuerdo sobre la PAC «por la mayor presión ambiental y social a la que se quiere someter al sector agrario». La organización agraria critica la intención del Parlamento de elevar el nivel de exigencia para las explotaciones en las cuestiones relacionadas con medio ambiente y cambio climático «con un mayor porcentaje para ecoesquemas y más rigidez en su aplicación en los primeros años».

Para UCCL «lo importante de verdad» es que estos ecoesquemas den respuesta a necesidades del sector y sean atractivos para que los agricultores y ganaderos participen en los mismos y aseguren su buen funcionamiento. La organización se opone a dedicar más dinero de la PAC al objetivo ambiental y a aumentar la presión sobre las explotaciones «mientras no se exige nada ni remotamente parecido a los productos importados» y considera que la respuesta del sector agrario a la ambición ambiental de la UE es ya más que suficiente y la mayor en términos cuantitativos y cualitativos de todas las políticas europeas.



Un agricultor prepara la tierra al volante de su tractor para una nueva plantación en una pequeña explotación agraria de carácter familiar. uccl